

Análisis Plural de la Realidad Nacional



Salto Definitivo al Neoliberalismo

Nuevo gobierno

Economía sin cambio de rumbo

Maria del Carmen Quintere Rome

Un saludo profundamente fraternal a las 75 delegaciones indígenas de diversas partes del mundo que se reunieron en Panamá para organizarse por sus derechos; a los zapatistas, que con su marcha alumbraron de nuevo el camino del despertar social.

En la epopeya que cientos de mexicanos emprenden diariamente hacia Estados Unidos en busca del trabajo que aquí no hay, el pasado 13 de mayo murieron 14 personas en el desierto de Arizona.¹ Semanas anteriores se había suscitado cierta polémica-escándalo por la noticia de que el gobierno mexicano entregaría a los migrantes ilegales un botiquín de primeros auxilios. El gobierno hubo de retractarse, pero también les ha hecho recomendaciones como la de no cruzar el río si no saben nadar. Tan lamentables iniciativas nublan el único gesto de defensa de intereses nacionales que se ha visto dentro de la alianza financiero-energética que los nuevos gobiernos de México y Estados Unidos han revitalizado: un acuerdo para legalizar el trabajo de mexicanos en ese país; necesidad que Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal de ese país, ha señalado hace más de un año.

En junio el precio de la leche Liconsa subió de 3 a 3.50 pesos/litro. La compran alrededor de 4 millones de familias cuyos ingresos son de hasta 2.5 salarios mínimos; el nuevo precio puede significar, por ejemplo en el Distrito Federal, que el con-

¹ En el curso de 2001 han muerto 97 migrantes en la frontera, véase Carlos Benavides, "En 2001, 97 muertos en la frontera", en *El Financiero*, 24 de mayo de 2001, p. 17.

sumo promedio de 1.17 litros diarios por familia baje 14.3%.² La justificación, como siempre, es catastrofista: de no aumentarse el precio, la empresa no podría seguir operando.

Entre tanto, el regocijo público y privado adelanta vísperas en la bolsa de valores por el anuncio de la compra de Banamex por CitiBank, a pesar de sus antecedentes de malos manejos; además, la operación no generará pago de impuestos como ocurre normalmente en cualquier compra-venta. En cambio se persiste en el IVA a alimentos básicos y medicinas.

En el marco de la transición política que estamos viviendo, la realidad compleja de la economía revela procesos de deterioro generalizado, cuyo mayor impacto recae sobre los grupos de la sociedad más débiles.

No obstante el gran ruido y confusión de un voluntarismo que se empeña en reafirmar desde Los Pinos el sano estado de la economía y el nuevo aliento que le dará el nuevo gobierno para elevarla al rango de primer mundo, este discurso hasta ahora sólo se diferencia de gobiernos anteriores en que reemplaza el formato estatista por el de un lenguaje relajado y poco afortunado, que se apoya en técnicas de manejo de imagen.

El cambio político por el que la ciudadanía votó en julio de 2000 parece precipitar los acontecimientos en el campo de las decisiones económicas hacia una mayor enajenación de recursos y decisiones sobre nuestro destino, declinándolos en favor de los múltiples planes que hoy, con el nuevo gobierno de Estados Unidos, se revelan con creciente claridad.

Algunos ven el neoliberalismo bajo la fascinación de las nuevas tecnologías, con las que se puede elaborar representaciones neutrales sobre la nueva economía del conocimiento y producciones abstractas. Pero el sistema lo realizan actores y el juego no es por ahora de resultados “ganar-ganar”, hay globalizadores y globalizados.

Sin embargo, los males no se derivan sólo del paraguas del neoliberalismo, sino que nosotros también tenemos responsabilidad directa. Somos una sociedad con hondas fracturas de identidad, que apenas empieza a conocer lo indio gracias a los

² Miguel Ángel Velázquez, “Ciudad Perdida”, en *La Jornada*, 30 de mayo de 2001, p. 39.

Nuevo gobierno

zapatistas, y que por lo mismo no ha logrado unidad ni proyecto propio. Los resabios coloniales subsisten en la desigual distribución de la riqueza, y en el rentismo de parte de la clase empresarial, ajena a la innovación.

Y, salvo el periodo de los grandes cambios fundacionales de la Revolución mexicana, la atención siempre ha estado puesta en el mundo desarrollado de Occidente, lo cual se explica porque ha sido el modelo de los últimos siglos, exacerbado por el poco aprecio que nos hemos tenido.

Hay que sacudir las ideas o impresiones sobre la realidad de la economía. Una vez más, la misma sociedad puede ser la protagonista principal. La airada reacción ante el caso del IVA se extendió por todo el país y entre diversos sectores, sindicatos, intelectuales, académicos, organismos no gubernamentales, y se ha hecho explícita en marchas, foros de discusión, desplegados de prensa, mítines, regalos de libros.

1. En 2001, retorno al lento crecimiento

El 2000 fue un año de inusitado crecimiento (6.9%) para esta economía, sujeta desde hace 18 años a políticas restrictivas que sólo se han relajado con motivo de elecciones federales, 1997 y 2000. Hoy el retorno a la “normalidad” del lento crecimiento como fórmula de equilibrio macroeconómico se ve acentuado por la desaceleración económica en Estados Unidos.

Cuando era candidato, el presidente de la República ofreció un crecimiento de 7% y un millón de empleos anuales; posteriormente matizó su ofrecimiento y declaró que sería la meta a alcanzar al final de su gobierno. El presupuesto de ingresos y gastos del gobierno federal para 2001 propuso crecer 4.5% y 700 000 nuevos empleos. Ante el impacto de la economía estadounidense, el Banco de México ha reducido la estimación a una tasa de 3%.

Internamente era previsible crecer menos porque se ha estructurado una economía que depende mucho de las importaciones, y si aquélla se reactiva éstas también lo hacen y la balanza comercial se desequilibra, presionando así hacia una mayor entrada de capitales para nivelarla o hacia la devaluación. Este

Análisis Económico

Último desenlace reactivaría la inflación y haría que las tasas de interés perdieran atractivo para la inversión externa, objetivo final y sustento de toda la política económica del neoliberalismo mexicano. Por eso, desde el segundo semestre de 2000 se aplicaron medidas monetarias y fiscales de “enfriamiento” de la economía.

Dicho enfriamiento es también eco del freno que en el mismo semestre se le aplicó al largo periodo de crecimiento en Estados Unidos³ para contrarrestar las señales inflacionarias y el alza en las acciones de las empresas tecnológicas (índice Nasdaq). Pero la reacción a la baja fue tan inmediata que desde fines de 2000 se han adoptado medidas de reactivación del crecimiento (las tasas de interés han bajado cinco veces) para evitar que se produzca una contracción de la economía, es decir, recesión. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que su crecimiento será de 1.5%, menos de la mitad de lo originalmente propuesto (3.2%).

En México, el primer trimestre reporta un crecimiento de 1.9%, con una contracción en los sectores manufacturero y agropecuario que podría ser el preludio de una recesión. De noviembre de 2000 a marzo de 2001 se perdieron 255 000 plazas de trabajo. El mayor impacto procedió del paro o descenso de la actividad en maquilas y empresas multinacionales que operan para el mercado de Estados Unidos, el peso de las cuales es determinante en la economía mexicana en virtud de su orientación prioritaria a la de ese país: le destina 89% de sus exportaciones y 73% de sus importaciones provienen del mismo; la industria maquiladora, que realiza 48% de las exportaciones, es de propiedad estadounidense, así como 63% de la inversión extranjera en el sector productivo.

Pero el efecto ha sido de mayor complejidad. La disminución en las tasas de interés en Estados Unidos, y su movimiento opuesto

³ En el decenio de los noventa, su economía registró crecimiento sostenido, baja inflación, bajo desempleo, superávit fiscal; su mayor problema, el aumento del déficit en la balanza comercial. La crisis de Asia dio signos de una posible caída en el mercado bursátil de ese país que podría reflejar una crisis de sobreproducción, y contagiar la caída al resto de la economía. Por eso se provocó su desaceleración. Unos ven el inicio de una recesión, otros una ligera baja que no interrumpe el crecimiento de la década pasada en virtud del impulso de las nuevas tecnologías que lo liderean.

Nuevo gobierno

en México por las restricciones monetarias aplicadas, han impulsado la transferencia de capital de corto plazo desde el primero al segundo, visto que éste paga mayores rendimientos y presenta menos riesgos que Argentina y Brasil. De ahí la fortaleza artificial y volátil del peso: su sobrevaluación llegó a 33.6% en abril al cotizarse en 9.25 frente al dólar (valor real, 12.35).

El peso fuerte encarece las exportaciones de las empresas mexicanas y las disminuye, mientras que estimula las importaciones porque se abaratan, acrecentando el desequilibrio de la balanza comercial, al tiempo que el mayor ingreso de productos importados desplaza a la producción nacional y acentúa la desaceleración en la producción.

El aumento del déficit en la balanza comercial (-2 918 millones de dólares en enero-mayo, casi el doble del mismo periodo en 2000) presiona el de la cuenta corriente (balanza comercial + servicios), de -4 388 millones de dólares en enero-marzo. Las reservas de divisas, de 40 000 millones de dólares, cubren holgadamente este déficit mientras las inversiones de corto plazo no se muden del país, lo que ocurrirá al repuntar la economía de Estados Unidos o aumentar las tasas de interés en otros países.

Por eso el FMI decidió darle a México un nuevo préstamo, llamado sistema de prevención de crisis, por 20 000-25 000 millones de dólares.

A diferencia de Estados Unidos, que está bajando las tasas de interés y temporalmente algunos impuestos para estimular la economía, el gobierno de México no ha reaccionado ante el nuevo entorno y ha seguido lo que se llama una política procíclica, con medidas que acentúan la desaceleración, pero debería hacer lo contrario. Aunque la tardía flexibilización de la política monetaria –en mayo– favorecerá el consumo y la inversión al reducirse las tasas de interés, por el lado del gasto público, el otro instrumento de aliento o restricción de la actividad productiva, el presupuesto se ha recortado en 3 375 millones y 30 000 millones de pesos, con el argumento de que los ingresos del gobierno han sido insuficientes. Estas medidas se interpretan como presiones para conseguir la reforma fiscal, pero

Análisis Económico

contrarrestan el impulso al crecimiento de la baja en las tasas de interés.

Por otra parte, la inflación ha sido moderada (1.12% en el primer trimestre), pero su efecto positivo, plasmado en el mayor poder de compra que da al salario, ya se ve amenazado porque las autoridades lo consideran como un costo que debe abatirse para no perder competitividad (así se avala el endurecimiento de negociaciones laborales o el simple abaratamiento del pago al trabajo donde no median contratos colectivos).

La posibilidad de reactivar el mercado interno en esta coyuntura no se ha tomado en cuenta.

2. La nueva hacienda pública redistributiva

Así se llama el paquete de iniciativas de reforma fiscal y financiera que el gobierno federal presentó al Congreso de la Unión. El debate se ha centrado en la primera, y el Congreso de la Unión decidió dejarlo pendiente para el periodo ordinario de sesiones de septiembre.

La propuesta fiscal consiste fundamentalmente en dos medidas:

- a) hacer extensivo el impuesto al valor agregado (IVA) de 15% a renglones hoy exentos: alimentos básicos (los procesados pagan el impuesto), medicamentos, libros, educación privada. El interés real va sobre los dos primeros de esos productos;
- b) reducir el impuesto sobre la renta (ISR) a 32% tanto a personas, que pagan hasta 34%, como a empresas, que pagan hasta 40%. Aparentemente se elimina el régimen simplificado que exenta del ISR a actividades agropecuarias y al transporte de carga y pasajeros; es un verdadero paraíso fiscal del que se benefician empresas grandes que incluso cotizan en bolsa, pero también están productores modestos. La propuesta no distingue tamaños.

Con el nuevo IVA se recaudarían alrededor de 130 000 millones de pesos adicionales al año; no se encontraron datos sobre la reducción de ingresos que provocaría el menor ISR.

Nuevo gobierno

El tema del IVA ha acaparado la atención pública durante semanas y ha alcanzado grandes proporciones. El más que justificado enojo de la sociedad, lejos de recibir del nuevo gobierno el cambio por el que gran parte de la ciudadanía votó, se encuentra con más de lo mismo, es decir, mermas a sus menguados ingresos: la pobreza afecta a 70% de los 100 millones que habitamos este país. Pero es notable también la fuerza con la que el gobierno federal ha atizado el fuego en aras de obtener la aprobación: el presidente decidió convertir en informe del ejecutivo el reporte trimestral sobre la economía que por ley elabora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual aumenta el clima de alarma sobre la situación de las finanzas públicas; igual sentido tuvieron los dos recortes al gasto público comentados, más los anuncios-entrevistas en radio y televisión.

La campaña de atemorización y/o persuasión presenta a la propuesta como la solución a todos los males y la varita mágica del progreso, o bien la visión del caos y la derrota si se rechaza. Quizá su efecto ha sido inverso pues la oposición pública se ha intensificado.

El diputado Luis Pazos, del PAN, hizo explícito que los 130 000 millones por el IVA adicional no afectan el presupuesto de este año, aprobado en 2000, de manera que las finanzas públicas podrán operar normalmente, dentro de las limitaciones ya previstas.

La cantidad es importante pero no decisiva, y vías de obtenerla hay muchas. ¿Por qué un nuevo gobierno se expone a un serio desgaste de imagen, en especial cuando ha apostado precisamente a ésta como apoyo de su gestión, y dañar el capital invaluable que representa la energía social liberada por la transición política? Encuestas de opinión pública revelan un rechazo de 82% a la iniciativa del gobierno, y en la encuesta del periódico *Reforma* entre quienes votaron por el señor Fox respecto a si lo habrían hecho de haber sabido que buscaría ampliar el IVA, 52% respondió negativamente.

Una primera explicación podría ser tan sencilla como la facilidad con que se pueden aumentar los ingresos vía el IVA; ya lo vivimos en 1995 cuando se incrementó de 10% a 15% por razones de crisis financiera. Una segunda consistiría en que se acata la línea fiscal que el nuevo gobierno de Estados Unidos

fortalece, de cobrar más a los que menos tienen y liberar a los que más tienen. Una tercera, más aventurada pero quizá plausible, es que la propuesta puede servir de blanco para distraer la atención respecto a cambios más trascendentes, como la privatización de energéticos, el Plan Puebla Panamá... aquí habría que considerar por qué el PAN y el PRI rechazaron la reforma, cuando actuaron como un solo hombre para modificar y aprobar la ley indígena.

La reforma fiscal propuesta por el ejecutivo federal es sólo recaudatoria y profundiza la inequidad histórica de la carga tributaria y los beneficios fiscales, fuente decisiva de la disparidad en la distribución de la riqueza en el país (véase el recuadro al final del texto).

Una duda sencilla es por qué se aumenta el IVA y se reduce el ISR si se busca incrementar los ingresos tributarios. Su efecto es en favor de los que más tienen y en contra de los que menos tienen. Se hacen elaboraciones muy reborujadas para decir que la reforma no dañará a los pobres y que incluso los beneficiará: a 5 millones de familias en pobreza extrema (ingreso diario de 10 pesos) se les entregarán 108-112 pesos mensuales para compensar el gasto del IVA, cuando la sola instrumentación del mecanismo puede resultar más cara. Se dice que de todos modos el IVA lo pagarán los que ganan mejor porque son los que más consumen, lo que equivale a aceptar que como los pobres consumen poco no importa que consuman todavía menos; además, se promete una canasta básica de medicinas a las que no se cobrará el impuesto (medicinas de pobres para enfermedades de pobres, pero ¿si al pobre se le ocurre enfermarse como “no pobre”?).

Por otra parte, se presenta como gran regalo la exención del pago de ISR a quienes ganen hasta cinco salarios mínimos, pero esa exención existe desde hace tiempo.

La necesidad de la reforma fiscal es ampliamente reconocida, y por su impacto en la economía de empresas y personas es asunto público de primer interés. La política fiscal puede ser un valioso instrumento para el estímulo de la inversión privada y para cumplir responsabilidades de bienestar social a través de educación, salud, servicios básicos. Para ello se requiere

Nuevo gobierno

una reforma integral que eleve ingresos del gobierno mediante impuestos que cobren justamente más a empresas y personas que mayores ingresos perciben, y además que use los recursos para promover una economía productiva, no especulativa.

Pero la reforma no ha sido posible porque los beneficiarios del *statu quo* se opusieron en el pasado, y la sociedad ha carecido de mecanismos para defender sus intereses. Con el neoliberalismo el problema se agudiza porque aboga por reducir las funciones del gobierno de promover la economía y de prestar servicios públicos, lo que en la práctica ha impulsado la economía especulativa y la corrupción, como lo documenta el caso de Banamex.

Existen alternativas para una amplia consulta pública (véase recuadro al final del texto).

Las posiciones de los principales partidos son: el PAN, sí al nuevo IVA, pero de 10%; el PRI, mayores modificaciones; el PRD presentó una propuesta de reforma integral.

En lo coyuntural, los 130 000 millones se pueden obtener por otras vías:

- ✓ Reserva de 124 000 millones de pesos en la Tesorería de la Federación. La senadora Laura Garza del PRI dio a conocer que esta reserva no se presentó en el primer informe trimestral del presidente.⁴
- ✓ Combatir la evasión en el pago de IVA. Estudios indican que del IVA actual sólo se recauda 59%; de 250 000 millones de pesos que se pagan por IVA, 115 000 millones no llegan a las arcas públicas.
- ✓ Austeridad, combate a la corrupción y renegociación de la deuda Fobaproa/IPAB. El gobierno del Distrito Federal presentó esa propuesta, que con las dos primeras medidas recaudaría 140 000 millones de pesos.
- ✓ Aplicar impuestos ecológicos. El Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (Céspedes) explica que son de fácil aplicación, flexibles y transparentes.

⁴ Andrea Becerril, "Ríspido debate en la Comisión Permanente por las incongruencias en el informe de Fox", en *La Jornada*, 17 de marzo de 200, p. 17.

Análisis Económico

- Un impuesto de 20% a combustibles aportaría 61 000 millones de pesos.
- ✓ Impuestos diferidos a los bancos. Como apoyo a su contabilidad, el gobierno les autorizó diferir el pago de varios impuestos, que asciende a 45 000 millones de pesos,⁵ y los causantes morosos deben pagar hasta tres veces el importe.

El cambio de poderes se anunció bajo el signo de una economía ordenada. El presupuesto de ingresos y gastos públicos para 2001 que elaboró el equipo de transición (anterior-nuevo gobierno) reduciría su déficit a -0.6% del PIB (-1.1% en 2000) ¡el anhelado equilibrio!

Ese equipo tuvo conocimiento de que el déficit era mayor, hoy se sabe que es de -3.5% a -5% del PIB, porque el gobierno asumió deudas por varios conceptos que no formalizó en su contabilidad: mayores pagos al IPAB por los fraudes bancarios, proyectos de infraestructura de largo plazo (Pidiregas), deudas de la banca de desarrollo.

Reaparece así la punta del iceberg: la deuda del gobierno se acrecienta aceleradamente para financiar la privatización de los bancos, sus rescates y sus reventas en un ciclo repetitivo que da a ganar a los banqueros y pasa la factura a la sociedad. Sólo ese renglón significa una deuda de 100 000 millones de dólares; pero aparte están los rescates a negocios privados hechos con sentido especulativo, como la construcción de carreteras, y quizá las obras concesionadas para PEMEX y Comisión Federal de Electricidad.

El gobierno se endeuda para pagarle intereses del IPAB/-Fobaproa a los bancos y otras deudas más; los bancos a su vez le prestan al gobierno y aseguran así utilidades dentro de este círculo, sin necesidad de prestar gran atención al crédito a empresas y personas. En estos vaivenes se han abierto las puertas a capital extranjero, que con el negocio Citibank-Banamex controlará alrededor de 98% del sistema bancario. No hay país que haya enajenado a tal grado sus bancos porque se pierden las políticas monetaria y financiera.

⁵ Carlos Fernández, "México, S. A.", en *La Jornada*, 20 de abril de 2001, p. 17.

Nuevo gobierno

3. El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006⁶

Samuel Schmidt señala acertadamente que el presidente “nos está vendiendo una recompensa política a cambio de continuar la misma política económica”.⁷

El plan señala que es producto de una amplia consulta con la ciudadanía (a través de correo estándar y electrónico, foros); en todo caso, fue débil y limitada (un listado de temas sobre los que uno podía opinar lo que quisiera). De las tres áreas que lo integran, la correspondiente a economía se llama “Crecimiento con calidad”; sus diagnósticos son poco sustentados y de claros tintes políticos: un juicio duro y errado de la política nacionalista de otro tiempo, saldos positivos del sexenio anterior. Las propuestas son como un listado de enunciados mezclados entre sí y repetitivos y no se dice cómo se lograrán ni las metas.

Es más fácil entender las líneas de política económica en la agenda para el desarrollo que el Banco Mundial preparó con la participación del equipo de transición.⁸ Las recomendaciones se sintetizan en cinco puntos: consolidar los avances macroeconómicos, acelerar el crecimiento mediante una mayor competitividad, reducir la pobreza mediante el desarrollo del capital humano, cuidado del medio ambiente y eficiencia y responsabilidad del gobierno. El desglose de los puntos lleva como mensaje central continuar y profundizar la privatización y la apertura al exterior, en el renglón de energéticos, servicios públicos de salud, de agua. Para ello deberán eliminarse esquemas de protección colectiva como la legislación laboral y someter los recursos naturales a la lógica de mercado.

4. La incorporación al Norte se acelera

El arribo de George W. Bush a la presidencia de Estados Unidos, republicano y empresario del petróleo, ha coincidido con

⁶ Presidencia de la República, *Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006*, México, Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2001.

⁷ Karina Avilés, “Entrevista con Samuel Schmidt, Fox mantiene el proyecto económico de sus antecesores”, en *La Jornada*, 28 de mayo de 2001, p. 14.

⁸ The World Bank, *Mexico. A Comprehensive Development Agenda for the New Era*, Washington, D.C., The World Bank, 2001.

el activo despliegue público de los planes geopolíticos de ese país para el continente americano. El lema “América para los americanos” toma cuerpo en esta era de conformación de bloques económicos regionales. Para competir frente a Europa y Asia, Estados Unidos busca asegurarse el continente como fuente de materias primas, área de producción intensiva en mano de obra y mercado para sus productos y servicios en una relación subordinada y de desigualdad, carente de la reciprocidad y cooperación que se da en los otros dos bloques.

El gobierno mexicano acata. Los principales mecanismos son:

a) Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA)

En la Tercera Cumbre de las Américas (Quebec, abril de 2001) a la que asistieron los mandatarios del continente, el gobierno de Estados Unidos no pudo acelerar la firma del acuerdo (en el cual se viene trabajando desde 1994) porque su Congreso le ha vetado el *fast track*.⁹ En cambio fueron temas principales la cláusula democrática para excluir a países que la cumbre juzgue no democráticos, con dedicatoria a Cuba que no fue invitada y como posible justificación a intervenciones militares, y la integración energética continental.

Se prevé que el acuerdo se firmará en 2005. Es una ampliación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero endurecido con elementos de mayores liberalizaciones frustradas: a) el Acuerdo Mundial de Inversión, rechazado por Francia y por la opinión pública de la cual se originaron los movimientos globalifóbicos, debido a que pretende conferir una libertad a las empresas multinacionales que rebasa las facultades de los gobiernos, a los cuales puede demandar aun si éstos protegen la salud pública o los recursos naturales –México enfrenta un caso con la empresa Metalclad¹⁰–; una nueva ronda de liberalización comercial de la Organización Mundial de

⁹ Es la facultad que el Congreso confiere al ejecutivo para negociar acuerdos que el primero aprobará o rechazará, *sin hacerle modificaciones*.

¹⁰ Esa empresa de Estados Unidos compró una planta de tratamiento de desechos industriales en San Luis Potosí; ignoró las medidas de seguridad requeridas y el gobierno del municipio le impedía operar. Metalclad demandó al gobierno ante un panel del TLC y ganó; recibirá 17 millones de dólares (Greenpeace México).

Nuevo gobierno

Comercio que comprenderá no sólo mercancías y servicios convencionales, sino otros “intangibles” como patentes, fuente de control decisiva en las nuevas tecnologías, y cuya aprobación fracasó en Seattle, Washington, por oposición de los países africanos y del Caribe y la sociedad civil.

Como el TLC, el ALCA no se limita al libre comercio, sino que abre las fronteras a la inversión en todas las áreas y a la apropiación de la flora por empresas farmacéuticas o agroindustriales,¹¹ fuerza a aceptar productos transgénicos cuyos efectos para el consumo humano son inciertos –Europa y otros países los rechazan.

b) El acuerdo de integración energética de América del Norte

En la misma reunión de Quebec los jefes de gobierno de América del Norte se reunieron en privado para tratar la integración energética de la región. Parece haberse formado una comisión para tal efecto, aunque las autoridades mexicanas lo niegan.

Según analistas de Estados Unidos, a este país le ha interesado el petróleo mexicano desde que fue nacionalizado. La disponibilidad de energéticos es estratégica para el mayor consumidor de los mismos, y según versiones actuales Estados Unidos tiene reservas de petróleo para sólo 10 años –quizá son superiores pero de extracción más cara–, mientras que en energía eléctrica California enfrenta escasez por efecto de la privatización del servicio.

En sus visitas al extranjero, el presidente de México invita a invertir en energéticos. Aquí niega la privatización, pero ya se perfilan las estrategias para evadir el artículo 27 de la Constitución; por ejemplo, se amplían las concesiones a privados para generación de electricidad sin privatizar las empresas actuales y, lo mismo que en petróleo, se separan producción y distribución y se concesionan a privados.

La justificación es que estas industrias están obsoletas y el gobierno no puede financiar las inversiones. Pero esta descapi-

¹¹ Agrupaciones civiles de México, Canadá y Alemania están pidiendo a Europa que revoque a Dupont la patente que obtuvo sobre una variedad de maíz mexicana pues no es un invento y los campesinos mexicanos tendrían que pagar por su uso.

Análisis Económico

talización ha sido deliberada y sí tiene solución productiva sin necesidad de enajenar el patrimonio nacional: reducirles la pesada carga fiscal, mejorar su operación con el concurso de los empleados, financiarse en mercados de capitales.

Entretanto, la sociedad está expectante. En los dos sexenios anteriores se lograron frenar estas privatizaciones y hay propuestas alternativas de los mismos sindicatos y de expertos.

c) La marcha hacia el Sur

Es sintomático que en informes recientes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo se preste especial atención a las regiones de abundantes recursos naturales en Latinoamérica, so pretexto del rezago que padecen sus habitantes. Y es que las tecnologías de punta ligadas a la biología se interesan en la biodiversidad, y recursos como el agua (cuya escasez va en aumento) se vuelven objeto de interés comercial.

El Plan Puebla Panamá, que con otros nombres ronda hace tiempo, se anuncia como el propósito de rescatar a la región del rezago, mediante inversión privada en infraestructura, en la riqueza energética y en la biodiversidad y maquila barata. El eje articulador será la infraestructura de transporte que conecta con Estados Unidos, ya en construcción.

El plan Colombia, mediante el cual Estados Unidos combate el narcotráfico dentro de ese país, se interpreta como el brazo armado que junto con el plan económico forma la pinza que delimitará la zona de seguridad geopolítica para Estados Unidos (más al sur se le ha dificultado avanzar por la oposición que ha presentado Brasil). Puede ser también que con los negocios en la zona se busque formar un muro de contención de migrantes.

Las reivindicaciones zapatistas son la antítesis de ese plan que los excluirá o los dominará y que cortará su relación vital con la tierra.

Nuevo gobierno

5. La venta de Banamex¹²

El anuncio de que Banamex se venderá a Citibank de México, del grupo financiero estadounidense Citygroup, uno de los principales en el mundo, es una costosa lección de cómo no deben hacerse las privatizaciones y aprender para las que están en puerta.

Además abre una incierta oportunidad de que se revise el viciado rescate de los bancos y que se ajusten parte de las cuentas y las responsabilidades. Su costo asciende a 800 000 millones-1 billón de pesos (millón de millón).

La propuesta no se ha presentado oficialmente, quizá por cautela ante el enojo público. Pero la Comisión Permanente del Congreso decidió cancelar o suspender el negocio ya que involucra recursos públicos por concepto de rescate bancario, lo cual reabre el caso Fobaproa/IPAB. Ahora el primer problema es que se desconoce el paradero de la información (sobre todo el proceso de rescate) y el IPAB indica que no tiene elementos para calcular el costo de la crisis bancaria ni conoce el tiempo que debe durar su rescate.

Un primer paso sería que el IPAB regrese a los bancos los títulos de créditos “chatarra” que les cambió por pagarés y fincar responsabilidades a funcionarios públicos involucrados. Además, el diputado Jesús Ortega del PRD informó que se puso en contacto con congresistas de Estados Unidos que investigan al Citibank por presunto lavado de dinero.

Algunos datos:

- En 1991 Roberto Hernández, accionista de una casa de bolsa, pagó con sus socios 3 200 millones de dólares al gobierno por la venta de Banamex. Ahora lo vende por 12 500 millones de dólares a Citibank y planea invertirlos en energía eléctrica.
- La crisis bancaria incluso benefició a los dueños de Banamex. No calificaba en los criterios de rescate bancario, pero

¹² Datos recabados de los periódicos *El Financiero* y *La Jornada*, y de las revistas *Expansión*, *Macroeconomía* y *Proceso*.

Análisis Económico

las autoridades le dieron acceso y privilegiado: le compró los títulos a 92% de su valor a los otros bancos, a 37.5%-50%. De 174 832 millones de pesos en pagarés que el gobierno dio a los bancos a cambio de sus títulos de crédito “chatarra”, 63 440 millones corresponden a Banamex, de los cuales el gobierno ya le pagó (regaló) 25% y le abona 8 000 millones de pesos al año por intereses. Aparte, el gobierno le debe un préstamo para el IPAB de 30 000 millones de pesos.

- En mayo de 2000 el IPAB entregó a la Cámara de Diputados los nombres de 711 personas y empresas incluidas en el rescate. Figuraron los apellidos Fox Quesada y Labastida Ochoa.
- El gobierno rescató dos veces a Banca Confía (propiedad de Lankenau). Le dio pagarés por 26 000 millones de pesos y luego la vendió a Citibank. Este banco demandó al IPAB cuando quiso liquidar los pagarés por adelantado, pues sólo de intereses recibe 4 000 millones de pesos anuales; ganó Citibank. Éste sólo pagó 45 millones de dólares por la compra de Confía.

Nuevo gobierno

Sistema fiscal mexicano

Algunos datos

- Estructura fiscal débil, con ingresos públicos que equivalen a 15.9% del PIB. En Costa Rica son de 30.6%, en Brasil de 33, en Holanda de 52.9%.
- Procedencia de los ingresos del gobierno mexicano: 48% por impuestos (de la renta (21%), IVA (16%)); 23% por derechos (empresas de gobierno) y 28% de organismos y empresas de gobierno (PEMEX).
- El pago de impuestos es de 11% del PIB. En Costa Rica es de 24%, Brasil de 20, Uruguay de 28, Europa de 40%.
- La carga de los impuestos es inequitativa. Las personas asalariadas y las independientes aportan 62% del ISR, las empresas sólo 38%. Muchas de éstas se acogen a los regímenes simplificado y de consolidación fiscal que eximen del pago de impuestos, incluso empresas de gran tamaño: alrededor de 300 corporativos que agrupan a 10 000 empresas realizan 80% de la producción nacional y están en régimen de consolidación fiscal que significa exención de 120 000 millones de pesos; en EU al ISR máximo de 40% se le suma el impuesto estatal que puede llegar a 8%. En la bolsa mexicana la enajenación de acciones que realizan personas físicas no paga ISR.
- El gobierno ha reducido su gasto (disminuir el tamaño del Estado) y modificado el destino del mismo: menos en gasto social e inversión pública (de cerca de 40% del PIB en los ochenta, a 22% en los noventa) y pagos elevados por deuda interna y externa.

Propuesta de reforma del Dr. José Luis Calva

Una reforma de amplia concertación que se instrumente en el curso de 10 años:

1. Simplificar y racionalizar el sistema fiscal, corrigiendo los regímenes de exención y de consolidación.
2. Ampliar la base de contribuyentes incorporando a grandes empresas que distribuyen a través de negocios informales, capital golondrino, ganancias bursátiles, herencias, ganancias de capital de personas físicas, dividendos entre accionistas.
3. Combatir evasión y elusión fiscal. Llega a 40%-60% del total gravable.
4. Elevar la tasa máxima del ISR a empresas y que los Estados puedan cobrar ISR adicional, como hacen los otros países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
5. No incrementar el IVA. El impuesto es regresivo pues afecta más a quienes menos tienen; el diagnóstico de la Secretaría de Hacienda identifica ese efecto. Enrique Iglesias propone un impuesto progresivo en el ISR.

Fuentes: XVII Seminario de Economía Mexicana 2001, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, 21-25 de mayo; Mariano Latapí Ramírez, *La realidad de los impuestos en México*, México, SICO, 1998.